



95
AMPARO DIRECTO No. 1947/80
HIDROGENADORA NACIONAL, S. A.
MTRO. J. RAMON PALACIOS VARGAS
SRIO. LIC. AGUSTIN URDAPILLETA TRUEBA

México, Distrito Federal.- Acuerdo de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día quince de octubre de mil novecientos ochenta.

Vo. Bo.

EL MINISTRO

V I S T O para resolver el juicio de amparo directo número 1947/80, promovido por Hidrogenadora Nacional, S. A., por conducto de su apoderado, [REDACTED] contra los actos que reclama de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales e hizo consistir en la sentencia definitiva dictada por aquella, en el toca a la apelación del juicio ordinario mercantil seguido por Zeferino Romero Bringas en contra de la Sociedad quejosa, ante el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, de la propia Entidad Federativa; y

R E S U L T A N D O

PRIMERO.-Los antecedentes de este negocio son los siguientes.

Por escrito de veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y siete, presentado al día siguiente ante el Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, México, [REDACTED] y [REDACTED], como apoderados de [REDACTED], demandaron, en la vía ordinaria mercantil, de Hidrogenadora Nacional, S. A., las siguientes prestaciones: a).- El cumplimiento del contrato mercantil de compraventa cele-

A. D. 1947/30

brado con fecha veintiséis de julio de mil novecientos setenta y seis, respecto de mil toneladas de pasta de semilla de ajonjolí, de extracción por solventes, a 43-44% de proteína mínima garantizada; b).-Como consecuencia de lo anterior se condene a Hidrogenadora Nacional, S. A., a efectuar la entrega de las mil toneladas de extracción por solventes, con un 43-44% de proteína mínima garantizada, según lo acreditaban con el documento que exhibieron, aceptado y firmado por ambos contratantes. Se convino como precio de la tonelada, la suma de [REDACTED], libre a bordo, en carro de ferrocarril, en la planta del vendedor en Tlalnepantla, Estado de México, incluyéndose dentro del precio, el pago del impuesto y maniobras de carga, estipulándose que el peso se establecería con la báscula del vendedor, debidamente verificada por la báscula del comprador, y de existir diferencias, se tomaría como promedio la báscula de ferrocarriles. La forma de pago pactada sería con un giro a la vista por conducto bancario contra la presentación de factura y conocimiento de embarque, allanándose desde este momento su representada para cumplir dicho pago en la forma convenida. La demandada se obligó expresamente a la entrega y embarque de trescientas toneladas en el mes de septiembre; trescientas en el mes de octubre y cuatrocientas en el mes de noviembre, todas en el año de mil novecientos setenta y seis, siendo el embarque a granel y cubriéndose a [REDACTED] en tonelada por puertas. Además Hidrogenadora Nacional, S. A., se obligó a abonar como comisión a [REDACTED]



96

- 3 -

A. D. 1947/80

[REDACTED], la cantidad de [REDACTED]
[REDACTED] por tonelada. En la parte del contrato mercantil que comprende condiciones especiales, los contratantes manifestaron que la entrega del documento válido entre ambas partes, habiendo sido suscrito por el comisionista y aceptado expresamente por aquellos. No obstante la obligación adquirida por Hidrogenadora Nacional, S. A., de efectuar las entregas de la pasta de ajonjolí en los plazos establecidos en el contrato mercantil de compraventa, la demandada no hizo ninguna remisión, adeudando a su mandante a la fecha de la demanda, las mil toneladas convenidas, habiéndosele requerido en innumerables ocasiones para el cumplimiento del contrato, a lo -- que se negó argumentando que el objeto del contrato había tenido un incremento en el precio por lo cual no podía cumplir con lo pactado. Como consecuencia de lo anterior, el actor -- con fecha veintidós de octubre de mil novecientos setenta y seis, recurrió a la Procuraduría Federal del Consumidor, a -- efecto de [REDACTED] el procedimiento conciliatorio, y en la diligencia celebrada a las once horas el día veintiocho de abril de mil novecientos setenta y siete, ante el Jefe del Departamento de Conciliación de dicha Dependencia, compareció el representante legal de Hidrogenadora Nacional, S. A., [REDACTED] [REDACTED] quien se negó a conciliar intereses, declarándose terminada la etapa, y no aceptándose el arbitraje de esa Procuraduría, se dejaron expeditos los derechos de las partes para que los ejercitaran ante los tribunales competentes expidiéndose la constancia respectiva, declarando la Procuraduría

A. D. 1947/80

ría Federal del Consumidor, violada la ley relativa como consecuencia del incumplimiento del contrato. Habiendo agotado todas las formas conciliatorias para resolver amistosamente el negocio, y dada la intrascendencia e incumplimiento de la demandada, se veían precisados a promover el presente juicio. Como preceptos aplicables señalaron los artículos 1, 2, 3 -- fracción II, 75, 78, 85, 371, 372 y 376 del Código de Comercio.

La demandada, Hidrogenadora Nacional, S. A., produjo oportunamente su contestación por conducto de su apoderado, [REDACTED], negando la procedencia de la acción ejercitada, y refiriéndose a los hechos de la demanda manifestó: Era verdad lo afirmado por sus contrarios en cuanto a la celebración del contrato a que aludieron, aclarando que el precio de tres mil seiscientos pesos convenido, era el que regía para la semilla de ajonjolí en la fecha de la celebración de aquel (veintiocho de julio de mil novecientos sesenta y seis), precio que se fijó en el contrato porque, de acuerdo con las circunstancias que prevalecían en esa época, hacían posible una transacción comercial equitativa, tanto para el comprador como para el vendedor. Del mismo modo era verdad lo aseverado por sus contrarios respecto a la forma de pago pactada, aclarando que su representada hubiera cumplido el contrato de haberle sido posible y si las circunstancias que prevalecían en la fecha de la firma del mismo, hubieran continuado. Lo cierto era que al devaluarse la moneda, su mandante no contó con semilla de ajonjolí que le permitiera cum-



97

- 5 -

A. D. 1947/30

plir con las obligaciones que asumió, debido a que sus proveedores, entre ellos [REDACTED]

[REDACTED] y diversos agricultores del Estado de [REDACTED] elevaron el precio del producto. Las semillas -- iban a ser vendidas a su representada a [REDACTED]

[REDACTED] kilo, y en los meses de septiembre, octubre y noviembre de mil novecientos setenta y seis, fecha en que iba a entregar el pedido, su mandante compró la materia prima al precio de [REDACTED]

[REDACTED] y [REDACTED] por kilo. El cambio de la paridad monetaria que se llevó a cabo el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y seis, aumentó el precio de la semilla, viniendo a afectar a su representada al grado de -- que sus [REDACTED] estuvieron inactivos por falta de semilla. --

Admitió igualmente que la demandada se obligó a entregar la mercancía convenida, lo que hubiera efectuado en los meses -- señalados de haberla tenido, pero repetía, que sus proveedores, al devaluarse la moneda, congelaron sus pedidos y se fijó un precio mayor a sus productos, por lo que aquella no tuvo semilla que entregar al actor, no estando, por lo mismo, obligada a cumplir lo imposible. Confesó también la existencia de las condiciones especiales del contrato, pero hacía --

notar que el mismo fue celebrado bajo circunstancias favorables a las dos partes, y a la fecha de la contestación de la demanda, solo beneficiaba, ese cambio de circunstancias, a la actora. Con la devaluación de la moneda mexicana, que se

A. D. 1947/80

consideró una causa de fuerza mayor, el precio de la materia prima se elevó, haciendo que fuera imposible a su representante cumplir con la prestación en primer lugar, por falta de semilla, y en segundo, porque el precio que prevalecía para esta última en julio de mil novecientos setenta y seis, fue elevado por los productores, ocasionando a su mandante una operación ruinosa de haberle entregado el producto. Esta cuestión quedaba al arbitrio y equidad del juzgador, ya que si el cumplimiento de un contrato se hacía exorbitantemente oneroso -- por hechos posteriores e imprevistos (devaluación) debía admitir que, en general, los contratos son de buena fe, y el -- acreedor no debe aprovecharse de cambios como ese que modifican el equilibrio entre la prestación y contraprestación, en sentido totalmente perjudicial al deudor. En la teoría se -- sostuvo que todo contrato tiene una cláusula tácita: "rebus -- "sic stantius", o sea, el convenio será cumplido si todas -- las circunstancias esenciales alrededor del mismo quedan sin modificarse. El Jurista Enneccesus-Lehmann, sostenía lo si-- guiente: "Si a la prestación posible en origen se oponen, -- "más tarde, obstáculos extraordinarios que solo pueden ven-- "cerse mediante un sacrificio absolutamente desproporcionado, -- "o bajo graves riesgos, o violando deberes de mayor importan-- "cia, la prestación tiene que considerarse como imposible a -- "la luz de la consideración racional, ética y económica, que -- "es decisiva para el derecho pero esto es solo una guía. Su -- "más precisa delimitación solo puede hacerse en el caso con-- "creto" (ob.cit., I, II, VI, Pág. 235). Aplicado lo anterior



18

- 7 -

A. D. 1947/30

al derecho mexicano, podría decirse que ante tales obstáculos extraordinarios (devaluación causa de fuerza mayor), - sí debe haber una modificación de equidad en el monto de - las obligaciones ante un caso de fuerza mayor, ya que de - acuerdo con el artículo 1625 del Código Civil, aplicado su pletoriamente, no se estará a lo expresamente pactado, si - no también a las consecuencias que sean conformes a la bue - na fe, al uso y a la ley. Esa tesis daba un criterio para poder evitar la ruina del deudor, modificando en términos de equidad el exacto cumplimiento de la prestación, cuando existan esos obstáculos, tan grandes que solo podrían ser superados con sacrificios totalmente desproporcionados a - la contraprestación que de recibir el obligado. Negó que no hubiese cumplido, no obstante los requerimientos -- que se hicieron a su mandante, con la obligación contraída, ya que si bien se celebró el contrato el veintiocho de ju - lio de mil novecientos setenta y seis, bajo circunstancias favorables a las partes y con el precio que regía en esa - fecha para la semilla, al modificarse la paridad monetaria, los proveedores aumentaron su precio y pretendían venderla con nuevos de garantía, que hacían que ese contrato fuera una operación ruinosa para su mandante, favoreciendo de -- esa manera a la actora y perjudicando la economía de su re - presentada. Al aumentar los proveedores el precio de garan - tía de la semilla de ajonjolí, Hidrogenadora Nacional, S. A., trató de llegar a un acuerdo con la actora, por conduc - to del mediador [REDACTED], a lo que se

A. D. 1947/30

negó rotundamente. Asimismo se le propuso por escrito partir la diferencia entre el precio de venta de [REDACTED] --- [REDACTED] por tonelada, y la del precio -- que corría en plaza en septiembre, octubre y noviembre de mil novecientos setenta y seis, proposición que tampoco -- aceptó la actora por convenirle a sus intereses la devaluación. Llegó que ante la Procuraduría Federal del Consumidor se negara a conciliar intereses, pues quienes no aceptaron transigir habían sido los actores. En innumerables ocasiones su mandante trató de llegar a un arreglo con su contraria, la cual no aceptó dado que le eran más favorables y -- benéficos los efectos de esos cambios de circunstancias. Al respecto citaba la teoría sobre la imposibilidad en el cumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o de fuerza mayor, según la cual a lo imposible nadie estaba obligado. El Código Civil, en su artículo 1940, determinaba que nadie está obligado al caso fortuito porque implica una imposibilidad que puede ser absoluta, desde el punto de vista físico, económico, o de tal manera difícil para el deudor, que cumplir con la prestación a pesar de ese cambio de circunstancias, sería imponerle una carga injusta y una situación demasiado grave para una sola de las partes. En esas condiciones, su mandante no estaba obligada al cumplimiento de -- la obligación pretendida por la actora, ya que por causa de fuerza mayor que cambió las circunstancias originales y toda vez que al mismo tiempo un tercero proveedor de la materia prima le incumplió, no está obligada a lo imposible, ni



79

- 9 -

A. D. 1947/80

a cumplir una prestación que sería ruinoso. Opuso como defensa la de falta de acción.

SEGUNDO.-Seguido el juicio en todos sus trámites - el Juez Primero de lo Civil, quien conoció del negocio por recusación del anterior, pronunció sentencia el diecinueve de junio de mil novecientos setenta y nueve, la cual contiene los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO.-Ha procedido la vía ordinaria mercantil elegida por el actor [REDACTED] - SEGUNDO.-La actora [REDACTED] no probó su acción y la demandada Hidrogenadora Nacional, S. A., justificó en parte sus excepciones y defensas; en consecuencia, - TERCERO.-Se absuelve a la demandada Hidrogenadora Nacional, S. A., de las prestaciones que le fueron reclamadas en este juicio. - CUARTO.-No se hace especial condenación en costas. - QUINTO.-Notifíquese personalmente.

TERCERO.-Inconforme el actor, apeló del fallo anterior, y, substanciado el recurso, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dictó sentencia definitiva el dieciocho de enero de mil novecientos ochenta, modificando la del inferior, cuyos puntos decisivos son del tenor literal siguiente: PRIMERO.-Se declaran substancialmente operantes los agravios hechos valer por [REDACTED] y [REDACTED], apoderados del señor [REDACTED]. En consecuencia, - SEGUNDO.-Se revocan los puntos resolutivos "Segundo y "Tercero" de la sentencia impugnada de fe-

A. D. 1947/80

"cha diecinueve de junio de mil novecientos setenta y nueve,
"dictada por el C. Juez Primero de lo Civil del Distrito Ju-
"dicial de Tlalnepantla, México, en el juicio ordinario mer-
"cantil promovido por [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] y [REDACTED], apoderados de [REDACTED]
[REDACTED] en contra de Hidrogenadora Nacional, S. A., tradi-
"tado bajo el expediente número 1358/77, para quedar dictados
"en la forma siguiente: "SEGUNDO.-El actor señor [REDACTED]
[REDACTED] probó en autos su acción y la demandada Hidro-
"genadora Nacional, S. A., no justificó sus excepciones y de-
"fensas, por lo tanto. TERCERO.- Se condena a la aludida de-
"mandada Hidrogenadora Nacional, S. A., al cumplimiento en -
"sus términos del contrato mercantil de compraventa exhibido
"en autos como documento fundatorio de la acción ejercitada
"en el juicio." - TERCERO.-Se deja intocado el resolutive --
"primero de dicha sentencia, por no haber sido materia de --
"apelación ni de agravios.- CUARTO.-Se confirma el resoluti-
"vo cuarto por haberse declarado improcedente en este aspec-
"to la inconformidad formulada al respecto por el apelante.
"QUINTO.-No ha lugar a hacerse especial condenación en cos-
"tas del juicio.- SEXTO.-Notifíquese personalmente". Es la -
que constituye el acto reclamado.

La demanda de amparo, presentada en tiempo, fue --
admitida por acuerdo del Presidente de la Tercera Sala de --
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el siete de ma-
yo de mil novecientos ochenta, ordenándose la notificación -
de dicho proveído al Procurador General de la República ----



- 11 -

A. D. 1947/30

acompañándole copia autorizada de la demanda, lo cual se hizo mediante oficio número 1764 de treinta de junio, también de mil novecientos ochenta. La responsable rindió su informe con justificación, y en proveído de ocho de agosto del mismo año, el propio Presidente de esta Tercera Sala ordenó se turnasen los autos al Ministro relator, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO.-Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso a) Constitucional, 44, 46, 153 y 167 de la Ley de Amparo y 26, fracción III inciso c), por tratarse de un juicio ordinario mercantil cuyo interés excede de [REDACTED]

SEGUNDO.-La existencia del acto reclamado quedó comprobada con el informe justificado de la autoridad responsable y con los autos originales de primera y segunda instancia que remitió.

TERCERO.-La Sala responsable apoyó la sentencia reclamada en las consideraciones siguientes:

"2o.-Sobre las inconformidades de que se trata es de establecerse lo siguiente: - Primeramente que no están en lo correcto los apelantes cuando afirman: "Que la Legislación aplicable supletoriamente al Código de Comercio lo sea la del Distrito Federal, y que por lo mismo resulta equivocado el fundamento legal de la resolución impugnada"

A. D. 1947/30

"nada en cuanto a la cita de los numerales hecha por el a
"quo de los artículos vigentes en el Estado de México, co-
"mo lo son el 1625, 1711 del Código Civil y 386 del de Pro
"cedimientos Civiles; pues a este respecto basta decirse,
"que atento el contenido y sentido de los artículos 2 y 1051
"de la invocada Legislación Mercantil, las normas aplicables
a dicho ordenamiento legal en forma supletoria lo son las -
"locales de cada Estado y no otras distintas a él, por lo --
"mismo en ese aspecto la sentencia combatida no les puede --
"irrogar los agravios reclamados al efecto; más aún cuando
"se advierte de la simple lectura de la resolución en comen-
"to, que en lo concerniente a la valoración de las probanzas
"del juicio, el a quo se ajustó primordial y esencialmente -
"a los dispositivos relativos del Código de Comercio y no a
"los que rigen en el Estado; además los propios apelantes -
"aceptan que el artículo 1625 del Código Civil vigente en -
"el Estado de México, es idéntico al 1796 de la Legislación
"Civil del Distrito Federal, en esas condiciones la inter--
"pretación del resolutor a tal dispositivo legal en nada, --
"puede afectarles; cuando se refieren ambos a la misma cues-
"tión y en iguales términos.- Ahora bien, por lo que hace -
"a lo aseverado por los recurrentes, de que: "el a quo obró
"ilegal e injustamente al haber absuelto a la demandada so-
"bre el cumplimiento del contrato base de la acción, con el
"argumento de que cambiaron las condiciones entre la fecha
"de la celebración de la compraventa de la pasta de semilla
"de ajonjolí; y las fechas en las que debía entregarse dicho
"producto al actor, puesto que la devaluación de la moneda -
"mexicana que sobrevino en ese entonces hacía imposible el -



101

- 13 -

A. D. 1947/30

"cumplimiento de tal obligación de parte de la enjuiciada,
 "por ser más elevado el precio en el mercado cuando tenía -
 "que entregar la mercancía, al pactado del referido produc-
 "to en el contrato, y ello en el caso de cumplirlo le repor-
 "taría a esta última perjuicio en lugar de beneficios econó-
 "micos; y que por tal motivo la absolvía del cumplimiento -
 "de la citada obligación, amparándose en que el hecho impre-
 "visible de la devaluación aludida, imposibilitaba a la men-
 "cionada vendedora a cumplir con el presenado contrato".-
 "Cabe estimarse sobre este aspecto, que los reclamantes con-
 "sus razonamientos adversos a tales consideraciones del a -
 "quo, están en lo cierto, ya que efectivamente como al res-
 "pecto lo argumentan en su escrito de inconformidades, la -
 "teoría de la imprevisión en la cual se fundó el a quo para
 "absolver a la demandada Hidrogenadora Nacional, S. A., so-
 "bre el cumplimiento del contrato exhibido en autos como --
 "fundatorio de la acción ejercitada en el negocio; no se en-
 "cuentra acogida, mucho menos comprendida en nuestra Legis-
 "lación; atento al mismo dispositivo 1625 del Código Civil
 "vigente, aplicado supletoriamente al de comercio, e invoca-
 "do ^{de} propósito por el resolutor para absolver a la prenom-
 "brada enjuiciada, en los términos que han quedado anotados
 "con antelación, porque se estima que a través del invocado
 "numeral, el Legislador quiso establecer la obligatoriedad
 "de las partes en el cumplimiento de sus respectivas presta-
 "ciones, expresamente pactadas en los contratos; de tal ---
 "suerte que nadie pudiera eludir su responsabilidad en ese

A. D. 1947/80

"sentido, de ahí que sea admisible apuntarse que la obser-
"vancia y cumplimiento de los contratos se imponen a las -
"partes, por lo que cada contratante tiene que efectuar su
"prestación so pena de ser constreñido a ello jurisdiccio-
"nalmente, dando lugar además a responsabilizarlo de los -
"daños y perjuicios correspondientes, y es comprensible tal
"actitud si se advierte que la seguridad de los contratam-
"tes así lo exige; pues de otra forma sería difícil que los
"contratos se observaran al dejarse su cumplimiento al li-
"bre albedrío de la voluntad de las partes, y bastaría de-
"cirse que las condiciones en las que se pactó habrían va-
"riado con respecto a la fecha en la que se pide su cumpli-
"miento, para eludir el mismo, amparándose en la menciona-
"da teoría de la imprevisión invocada al efecto por el a -
"quo en su sentencia apelada; cuando es un hecho evidente y
"fácilmente advertido por el sentido común, que las condi-
"ciones y circunstancias de la vida son cambiantes de tal
"forma que se puede decir, que vivir es transformarse, por-
"lo tanto no es admisible lo argumentado por el a quo de -
"que al cambiar las condiciones de la vida económica de -
"los que se pactó el contrato de mérito y la fecha en la
"que debía de cumplirse, siéndole desfavorables a la de-
"mandada, ésta estaba imposibilitada para cumplirlo por -
"serie onerosamente perjudicial a sus intereses; pues tal
"razonamiento resulta débil e insostenible si se toma en
"cuenta las aseveraciones anteriores de que la vida misma
"es cambio y transformación, por lo cual todo hombre con -



102

- 15 -

A. D. 1947/80

"toda la buena fe y equidad que se quiera, contrata afrontando riesgos y peligros después de madura reflexión, --
"aprovechando la buena suerte y sufriendo la mala, y no --
"por ello cuando resulte lesionado en sus intereses, diga --
"nos por algo imprevisible, ello lo imposibilite a cumplir --
"con sus obligaciones contractuales, tal y como lo sostiene --
"ne el a quo en su resolución anotada, tan es así que la --
"propia Legislación Mercantil en su artículo 385, infiere --
"que ni por causa de lesión, los contratos dejarán de cumplirse, en esas condiciones es evidente que a la luz del --
"invocado artículo 1625 del Código Civil vigente, el hecho --
"de que a la fecha de cumplirse el contrato base de la acción, le resulte más gravoso a la demandada el entregarle --
"al actor el producto vendido (pasta de ajonjolí), por el --
"incremento de su precio en el mercado, de ninguna manera --
"justifica el que no deba cumplirlo en sus términos o sea --
"en todo su tenor; porque tal norma le impone la obligación de su cumplimiento en ese sentido; también a las --
"consecuencias que, según su naturaleza son conformes a la --
"buena fe, el uso o la ley; entendiéndose por buena fe, no --
"como razona el a quo en su sentencia impugnada, en el --
"sentido de que si le es gravoso el cumplimiento del contrato alguna de las partes no debe observarlo; sino por el --
"contrario con base precisamente en ella, la buena fe, obliga al contratante a conducirse como persona honrada consciente de su responsabilidad y su deber, no ateniéndose --
"sola y únicamente a sus intereses, sino también y sobre to

A. D. 1947/80

"do al cumplimiento íntegro y puntual de su correspondien-
"te obligación contraída en todo contrato. Para terminar -
"es pertinente transcribir al respecto y en lo relacionado
"a la cuestión que nos ocupa, las notas 496, 501 bis y 502
"del Tratado de "Teoría General de las Obligaciones" del -
"Maestro Manuel Borja Soriano, Tomo Primero, Título Undéci-
"mo, Capítulo I y II, páginas trescientos veintitrés, trës-
"cientos veintisiete y trescientos veintinueve, Cuarta Edi-
"ción, de la Editorial Porrúa, S. A., de 1962, que dicen: -
"496.-La cláusula "Rebus sic stantibus"- Los canonistas de
"la edad media, que condensaban todo enriquecimiento de uno
"de los contratantes a expensas del otro, como contrario a
"la moral cristiana, no debían solamente considerar la le-
"sión contemporánea del contrato, sino también la que re-
"sultara de cambios ulteriores en las circunstancias. En -
"ambos casos había usura. Para poner el remedio considera-
"ron como sobre-entendida en los contratos una cláusula --
"rebus sic stantibus según la cual se reputaba que las par-
"tes habían subordinado implícitamente el mantenimiento de
"sus obligaciones, tal como las habían contraído, a la per-
"sistencia de las condiciones de hecho existentes en el día
"del contrato. Esta teoría, adoptada por los bartolistas,
"después por la doctrina italiana y alemana hasta el siglo
"XVIII y por algunos autores franceses antiguos, no ha sido
"conservada por nuestros grandes autores de los siglos ---
"XVII y XVIII. En el extranjero, esta teoría que Grotius -
"y Puffendorf quisieron limitar al terreno del Derecho In-



103

- 17 -

A. D. 1947/30

"ternacional, sufrió un retroceso al mismo tiempo que la
"teoría de la usura. Sin embargo, ha sido recogida en los
"Códigos Germánicos del siglo XVIII, pero parece en segui
da haber caído en el olvido. En Francia, en el siglo XIX,
"debía sucumbir ante el triunfo de la doctrina de la auto
"nomía de la voluntad (Planiet, Ripert et Esmein, t. VI,
"núm. 391). Introducir en un contrato la cláusula rebus sic
"stantibus, es decir, si las cosas quedan en el mismo esta
"do, es hacer frágil o destruir el contrato, es introducir
"la inestabilidad en la vida económica (Hernard, t. II, núm.
"1303). Esta cláusula no puede sobreentenderse, porque es -
"contraria a la utilidad económica del contrato. Cuando un
"contrato impone por cierta duración prestaciones sucesi--
"vas al deudor, es porque el acreedor ha querido garanti--
"zarla contra todas las eventualidades posteriores y particu
"larmente contra las variaciones de los precios. (Planiet, t.
"II, núm. 1182 bis). -501 bis. Trabajos de la Semana Inter
"nacional de Derecho en París, 1937. El Tomo II de estos --
"trabajos se ocupa de la revisión de los contratos por el
"Juez. De ese libro vamos a transcribir los párrafos más -
"importantes, a nuestro juicio, I. Relación general por Mi
"boyet. Por revisión entendemos las modificaciones suscepti
"bles de ser aportadas a un contrato por el juez, quien --
"sustituye un objeto más o menos diferente al que había si
"do estipulado inicialmente. La cuestión supone, pues, un -
"poder reconocido por la Ley al Juez de manera permanente.
"en presencia de circunstancias determinadas. ..El juez --
"francés tiene el poder de tomar en cuenta la buena fe, a

A. D. 1947/30

"la cual lo remite el Código Napoleón expresamente. Los -
"contratos se cumplen de buena fe (art. 1134, párrafo 3).
"Sin embargo, esto no le permite revisar el contrato, es -
"decir, substituir la voluntad de las partes por la suya,
"lo cual es contrario a la idea misma de la celebración de
"un contrato, un acuerdo de dos voluntades sobre cierto -
"objeto. Cuando el juez puede rehacer un contrato no hay
"verdaderamente un contrato, sino una obligación legal --
"que ocupa el lugar de la que existía. Llamemos francamen-
"te a las cosas por su nombre. Es pues la técnica del con-
"trato la que se ha opuesto en Francia a la improvisión, -
"hasta aquí. Esto no quiere decir que los contratos deban
"siempre cumplirse, pero entonces corresponde al legisla-
"dor, interviniendo y encargando al juez ejecutar su pensa-
"miento, hacer la novación de la obligación contractual en
"una obligación que será puramente legal, novación que pue-
"den justificar las circunstancias especiales. Pero esto -
"es tan grave y esas circunstancias son tan raras que no
"hay que confiar al juez de manera permanente un poder se-
"mejante (Págs. 1 a 13). II.-Relación de Lalou. La revisión
"de los contratos por el juez plantea un problema nacido --
"del conflicto de dos principios: el respeto a la palabra -
"dada, y la justicia contractual. Si el deudor tiene el de-
"ber de mantener la palabra dada -la fe jurada- el acreedor
"no tiene también el deber de respetar la justicia cuando
"el cumplimiento estricto y completo del contrato puede --
"aparecer inocuo? ¿El juez tiene el poder de tratar de con-
"ciliar estos dos principios igualmente indispensables al -



104

- 19 -

A. D. 1947/80

"orden social pero que en esta circunstancia se oponen?..
"para delimitar bien el campo de este estudio, precisemos
"que no se trata del papel del juez en la formación del --
"contrato y de la protección de los débiles, se trata exclu-
"sivamente de saber si una vez celebrado correctamente el --
"contrato, el juez puede corregirlo o enmendarlo por razo--
"nes de equidad. Los autores cristianos son los primeros --
"que han enseñado que el vinculum fraternitatis, existente
"entre los hombres, engendra el deber para el deudor de ser
"fiel a la fe jurada y para el acreedor de respetar la jus-
"ticia. Templar la fuerza obligatoria del contrato por la --
"consideración de lo justo, tal es en materia contractual,
"la doctrina constante de los padres de la iglesia. San Am-
"brosio, San Agustín, Santo Tomás de Aquino. El Código Ci-
"vil ha querido restringir el arbitrio que el juez tenía en
"el antiguo Derecho y asegurar la estabilidad de los contra-
"tos, aunque debiese por ello sufrir la equidad. En suma, --
"el Código Civil parece atenerse a la rigidez del contrato
"proclamada por el artículo 1134. En el conflicto señalado
"al principio de este estudio, entre el respeto de la pala-
"brada y la equidad, el primero, que había estado triun-
"fante en el Código Civil, pierde terreno. Hay que lamentar
"lo y repetir la palabra célebre: Dios nos preserve de la --
"equidad de nuestros Parlamentos" (Págs. 45 a 55). III.-Con-
"clusiones del Presidente Ripert.- Desde luego hay el peli-
"gro de dar a un poder judicial que carece de guía y de di-
"rección un poder que es casi ilimitado para hacer la revi-

A. D. 1947/30

"sión.. no sé, si se dejara a los Tribunales en libertad
"de revisar los contratos, de acuerdo con las circunstan
"cias económicas, si no abusarían de estos poderes. Y des
"pués, hay otra cosa y es mi máxima objeción: dando al juez
"el poder de revisar el contrato conforme a la buena fe, -
"se despierta en los contratantes esta inmensa esperanza
"no estar obligados, y esta buena fe del legislador engen
"dra la mala fe del contratante. Estos son mis queridos -
"colegas, los peligros que os quería señalar. No hay cues
"tión por el momento, puesto que todos los oradores se han
"declarado firmemente adictos a la fuerza obligatoria del
"contrato.." (Fágs. 215 217).-502.-Conclusión. El proble
"ma llamado de la imprevisión, como cualquier otro problema
"jurídico, puede considerarse desde dos ángulos que no --
"siempre coinciden: desde el punto de vista del Derecho -
"ideal y desde el punto de vista del Derecho positivo.- -
"Según el derecho ideal, la fuerza obligatoria del contra
"to debe templarse por la consideración de lo justo. Pero
"no se llega a esta solución dando al juez el poder de re
"visar contratos. Esta facultad debe quedar reservada al -
"Legislador para que la ejerza en circunstancias excepcio
"nales. En cuanto a nuestro Derecho Civil positivo: "Los -
"contratos legalmente celebrados serán puntualmente cumpli
"dos, y que la idea contenida en este artículo se encuen
"tra también en el artículo 1796 del Código de 1928 que di
"ce: "Los contratos...obligan a los contratantes no sólo -
"al cumplimiento de lo expresamente pactado..." (véase el
"Núm. 486 de este libro). Como los artículos del Código -



105

FORMA A-20

A. D. 1947/80

"Napoleón, citados por Demogue y por Bonnetcase en los nú-
"meros 498 y 500 de este libro, no se encuentran en nues-
"tro Derecho, salvo lo relativo al término de gracia acep-
"tado por el artículo 404 del Código de Procedimientos Ci-
"viles (véase núm. 481, t. II, de este libro), no cabe sog
"tener la existencia de un principio general de derecho, -
"favorable a la revisión del contrato por el juez. Esta le
"queda reservada al legislador y verémos su aplicación al
"estudiar nuestra legislación de aratoría y de pagos en -
"el tomo segundo de este libro.- Por lo que hace al pago -
"de gastos y costas del juicio, es de establecerse que al
"haberse absuelto a la demandada en la sentencia de Prime
"ra Instancia, el a que no tenía por que condenarla en ella
sobre tal prestación, de ahí que la argumentación en con--
"trario de la aporante en este aspecto resulta improceden-
"te. - 3o.-Habiendo resultado substancialmente operantes -
"los agravios de que se trata, proceden revocar la sentenci
"cia impugnada en sus puntos resolutivos "Segundo" y "Ter-
"cero" para quedar dictados en la forma siguiente: Segun-
"do.-El actor señor Zeferino Romero Brihgas probó en autos
"s la acción y la demandada "Hidrogenadora Nacional, S. A.,
"no justificó sus excepciones y defensas, en consecuencia.
"Tercero.-Se condena a la aludida demandada "Hidrogenadora
"Nacional, S. A." al cumplimiento en sus términos del con-
"trato mercantil de compraventa exhibido en autos como do-
"cumento fundatorio de la acción ejercitada en el juicio.-
"Se deja intocado el resolutive primero de dicha sentencia

A. D. 1947/80

"por no haber sido materia de apelación ni de agravios; -
"se confirma el resolutivo cuarto por haberse declarado -
"improcedente en este aspecto la inconformidad formulada
"al respecto por el apelante".

CUARTO.-La sociedad quejosa hizo valer, en su --
demanda, los siguientes conceptos de violación:

"1.-La autoridad señalada como responsable en la
"sentencia definitiva que de ella reclamo, viola en perju
"cio de mi mandante la garantía constitucional consignada
"en el artículo 14 del Código Político, ya que su senten--
"cia no se adecua a una interpretación jurídica de la Ley
"y no se funda en los principios generales del Derecho.- -
"En efecto, establece el cuarto párrafo del artículo 14 de
"la Constitución Federal: - "En los juicios del orden civil,
"la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a
"la interpretación jurídica de la Ley, y a falta de ésta se
"fundará en los principios generales del derecho.- Por su -
"parte la autoridad responsable en el acto que de ella se--
"clamo, establece en su considerando segundo que: Los agra-
"vios esgrimidos por los apoderados de la actora son correg
"tos y dice textualmente: "Ahora bien, por lo que hace a lo
"aseverado por los recurrentes, de que "el a quo obró ile--
"gal e injustamente al haber absuelto a la demandada sobre
"el cumplimiento del contrato base de la acción, con el ar-
"gumento de que cambiaron las condiciones entre la fecha de
"la celebración de la compraventa de la pasta de semilla de
"ajonjolí, y las fechas en las que debía entregarse dicho -
"producto al actor, puesto que la devaluación de la moneda



106

FORMA A-66

- 23 -

A. D. 1947/80

"mexicana que sobrevino en ese entonces, hacía imposible -
"el cumplimiento de tal obligación de parte de la enjui--
"ciada, por ser más elevado el precio en el mercado cuan--
"do tenía que entregar la mercancía, al pactado del refe--
"rido producto en el contrato, y ello en el caso de cum--
"plirlo le reportaría a esta última, perjuicios en lugar
"de beneficios económicos; y que por tal motivo la absol--
"vía del cumplimiento de la citada obligación; amparándo--
"se en que el hecho imprevisible de la devaluación citada,
"imposibilitaba a la mencionada vendedora a cumplir con el
"preseñalado contrato". Cabe estimarse sobre este aspecto,
"que los reclamantes con sus razonamientos adversos a tales
"consideraciones del Exco, están en lo cierto, ya que ---
"efectivamente como al respecto lo argumentado en su escri--
"to de inconformidad, la teoría de la imprevisión en la --
"cual se fundió el a quo para absolver a la demandada "Hidro
"generadora Nacional", S. A., sobre el cumplimiento del con--
"trato exhibido en autos como fundatorio de la acción ejer--
"citada en el negocio, no se encuentra acogida, mucho me--
"nos comprendida en en nuestra Legislación; atento al mis--
"mo dispositivo 1625 del Código Civil vigente, aplicado su
"anteriormente al de Comercio, e invocado a propósito por
"el resolutor para absolver a la prenombrada enjuiciada, -
"en los términos que han quedado anotados con antelación -
"porque se estima que a través del invocado numeral, el Le--
"gislator quiso establecer la obligatoriedad de las partes
"en el cumplimiento de sus respectivas prestaciones, expre--
"samente pactadas en los contratos; de tal suerte que na--

A. D. 1947/30

"die pudiera eludir su responsabilidad en ese sentido, -
"de ahí que sea admisible apuntarse que la observancia y
"cumplimiento de los contratos se imponen a las partes, -
"por lo que cada contratante tiene que efectuar su presta-
"ción so pena de ser constreñido a ello jurisdiccionalmen-
"te, dando lugar además a responsabilizario de los daños
"y perjuicios correspondientes, y es comprensible tal ag-
"titud si se advierte que la seguridad de los contratantes
"así lo exige; pues de otra forma sería difícil que los --
"contratos se observaran al dejarse su cumplimiento al li-
"bre juego de la voluntad de las partes, y bastaría decir-
"se que las condiciones en las que se pactó habrían varia-
"do con respecto a la fecha en la que se pide su cumplimen-
"to, para eludir el mismo, amparándose en la mencionada ---
"teoría de la imprevisión invocada al efecto por el a quo
"en su sentencia apelada; cuando es un hecho evidente y fá-
"cilmente advertido por el sentido común, que las condicio-
"nes y circunstancias de la vida son cambiantes de tal for-
"ma que se puede decir, que vivir es transformarse, por lo
"tanto no es admisible lo argumentado por el a quo de que
"al cambiar las condiciones de la vida económica de los --
"que se pactó el contrato de mérito y la fecha en la que -
"debía de cumplirse, siéndole desfavorable a la demandada,
"ésta estaba imposibilitada para cumplirlo por serie onera-
"samente perjudicial a sus intereses; pues tal razonamien-
"to resulta débil e insostenible si se toma en cuenta las
"aseveraciones anteriores de que la vida misma es cambio -



107

- 25 -

A. D. 1947/80

"y transformación, por lo cual todo hombre con toda buena fe y equidad que se quiera, contrata afrontando riesgos y peligros después de madura reflexión, aprovechando la buena suerte y sufriendo la mala, y no por ello cuando resulte lesionado en sus intereses, ligamos por algo imprevisible, ello lo imposibilite a cumplir con sus obligaciones contractuales, tal y como lo sostiene el a quo en su resolución anotada, tan es así que la propia Legislación Mercantil en su artículo 335, infiere que ni por causa de lesión, los contratos dejarán de cumplirse, en esas condiciones es evidente que a la luz del invocado artículo 1625 del Código Civil vigente, el hecho de que a la fecha de cumplirse el contrato base de la acción, le resulte más gravoso a la demandada al entregarle al actor el producto vendido (pasta de ajonjolí), por el incremento de su precio en el mercado, de ninguna manera justifica el que no deba cumplirlo en sus términos o sea en todo su tenor; porque tal norma le impone la obligatoriedad de su cumplimiento en ese sentido; también a las consecuencias que, según su naturaleza son conformes a la buena fe, el uso o la ley; entendiéndose por buena fe, no como lo razona el a quo en su sentencia impugnada, en el sentido de que si le es gravoso el cumplimiento del contrato alguna de las partes no debe observarlo; sino por el contrario con base precisamente en ella, la buena fe obliga al contratante a conducirse como persona honrada consciente de su responsabilidad y su deber, no ateniéndose sola y únicamente a sus intereses, sino también y sobre todo al cum

A. D. 1947/30

"plimiento íntegro y puntual de su correspondiente obliga-
"ción contraída en todo contrato. Para terminar es pertinen-
"te transcribir al respecto y en lo relacionado a la cues-
"tión que nos ocupa, las notas 496, 501 bis y 502 del Trata-
"do de "Teoría General de las Obligaciones" del Maestro Ma-
"nuel Borja Soriano, Tomo Primero, Título Undécimo, Capítu-
"lo I, Y II páginas trescientos veintitrés, trescientos ve-
"ventisiete y trescientos veintinueve, Cuarta Edición, de
"la Editorial Porrúa, S. A., de 1962, que dicen: - 496.-La
"cláusula rebus sic stantibus.-Los canonistas de la Edad Me-
"dia, que condenaban todo enriquecimiento de uno de los con-
"tratantes a expensas del otro, como contrario a la moral --
"cristiana, no debían solamente considerar la lesión conten-
"poránea del contrato, sino también la que resultara de cam-
"bios ulteriores en las circunstancias. En ambos casos había
"usura. Para poner el remedio consideraron como sobreentendi-
"do en los contratos una cláusula rebus sic stantibus según
"la cual se reputaba que las partes habían subordinado impli-
"citamente el mantenimiento de sus obligaciones, tales como
"las habían contraído, a la persistencia de las condiciones
"de hecho existentes en el día del contrato. Esta teoría, --
"adoptada por los bartolistas, después por la doctrina italia-
"na y alemana hasta el siglo XVIII y por algunos autores ---
"franceses antiguos, no ha sido conservada por nuestros gran-
"des autores de los siglos XVII y XVIII. En el extranjero, --
"esta teoría, que Grotius y Puffendorf quisieron limitar al
"terreno del Derecho Internacional, sufrió un retroceso al --
"mismo tiempo que la teoría de la usura. Sin embargo, ha si-



108

FORMA A-55

- 27 -

A. D. 1947/30

"do recogida en los Códigos germánicos del siglo XVIII, pero parece en seguida haber caído en el olvido. En Francia, en el siglo XIX, debía sucumbir ante el triunfo de la doctrina de la autonomía de la voluntad (Planiol, Ripert et Bismen, t. VI, núm. 391). Introducir en un contrato la cláusula *rebus sic stantibus*, es decir, si las cosas que dan en el mismo estado, es hacer frágil o destruir el contrato, es introducir la inestabilidad en la vida económica (Hérmerd, t. II, núm. 1303). Esta cláusula no puede sobreentenderse, porque es contraria a la utilidad económica del contrato. Cuando un contrato impone por cierta duración prestaciones sucesivas al deudor, es porque el acreedor ha querido garantizarla contra todas las eventualidades posteriores y particularmente contra las variaciones de los precios (Planiol, t. II, núm. 1182 bis).- 501 bis.- Trabajos de la Semana Internacional de derecho en París, 1937.- El Tomo II de estos trabajos se ocupa de la revisión de los contratos por el juez. De ese libro vamos a transcribir los párrafos más importantes, a nuestro juicio, I. Relación General por Niboyet.-Por revisión entendemos las modificaciones susceptibles de ser aportadas a un contrato por el juez, quien sustituye un objeto más o menos diferente al que había sido estipulado inicialmente. La cuestión supone, pues, un poder reconocido por la Ley al juez de manera permanente... en presencia de circunstancias determinadas... El juez francés tiene el poder de tener en cuenta la buena fe, a la cual lo remite el Código Napoleón expresamente. Los contratos se cumplen de buena fe (art. 1134, párrafo 3). Sin embargo, esto...

A. D. 1947/50

"se le permite revisar el contrato, es decir, substituir la
"voluntad de las partes por la suya, lo cual es contrario a
"la idea misma de la celebración de un contrato; un acuerdo
"de dos voluntades sobre cierto objeto. Cuando el juez pue-
"de rehacer un contrato no hay verdaderamente un contrato,
"sino una obligación legal que ocupa el lugar de la que --
"existía. Llamemos francamente a las cosas por su nombre.
"Es pues la técnica del contrato la que se ha opuesto en --
"Francia a la imprevisión, hasta aquí. Esto no quiere decir
"que los contratos deben siempre cumplirse; pero entonces --
"corresponde al legislador, interviniendo y encargando al --
"juez ejecutar su pensamiento, hacer la novación de la obli-
"gación contractual en una obligación que será puramente le-
"gal, novación que pueden justificar las circunstancias es-
"peciales. Pero esto es tan grave y esas circunstancias son
"tan raras que no hay que confiar al juez de manera perma--
"nente un poder semejante (Págs. 1 a 13). II.-Relación de --
"Lalou. La revisión de los contratos por el juez plantea un
"problema nacido del conflicto de dos principios: el respe-
"to a la palabra dada, y la justicia contractual. Si el deu-
"dor tiene el deber de mantener la palabra dada *la fe jura-
"da-, el acreedor ¿no tiene también el deber de respetar la
"justicia cuando el cumplimiento estricto y completo del --
"contrato puede aparecer inocuo? ¿El juez tiene el poder de
"tratar de conciliar estos dos principios igualmente indis-
"pensables al orden social pero que en esta circunstancia se
"oponen?... para delimitar bien el campo de este estudio, --
"precisemos que no se trata del papel del juez en la forma



A. D. 1947/30

"ción del contrato y de la protección de los débiles, se -
"trata exclusivamente de saber si, una vez celebrado correc-
"tamente el contrato, el juez puede corregirlo o enmendarlo
"por razones de equidad. Los autores cristianos son los pri-
"meros que han enseñado que el vinculum fraternitatis, exis-
"tente entre los hombres, tendrá el deber para el deudor de
"ser fiel a la fe jurada y para el acreedor de respetar la
"justicia. Templar la fuerza obligatoria del contrato por -
"la consideración de lo justo, tales, en materia contrac-
"tual, la doctrina constante de los padres de la Iglesia, -
"San Ambrosio, San Agustín, Santo Tomás de Aquino. El Cód-
"igo Civil ha querido restringir el arbitrio que el juez te-
"nía en el antiguo Derecho y asegurar la estabilidad de los
"contratos, aunque debiese por ello sufrir la equidad. En -
"suma, el Código Civil parece atenerse a la rigidez del con-
"trato proclamado por el artículo 1134. En el conflicto se-
"ñalado al principio de este estudio, entre el respeto de -
"la palabra dada y la equidad, el primero, que había estado
"triunfante en el Código Civil, pierde terreno. Hay que la-
"mentarlo y repetir la palabra célebre: Dios nos preserve -
"de la sequedad de nuestros Parlamentos. (Fágs. 45 a 55). --
"III.-Conclusiones del Presidente Ripert.- Desde luego hay
"el peligro de dar a un poder judicial que carece de guía -
"y de dirección un poder que es casi ilimitado para hacer -
"la revisión, no se, si se dejara a los Tribunales en liber-
"tad de revisar los contratos, de acuerdo con las circuns-
"tancias económicas, si no abusarían de estos poderes. Y --
"después, hay otra cosa y es mi máxima objeción, dando al -

A. D. 1947/30

"juez el poder de revisar el contrato conforme a la buena
"fe, se despierta en los contratantes esta inmensa esperan-
"za: no estar obligados, y esta buena fe del legislador en-
"gendra la mala fe del contratante. Estos son mis queridos
"colegas, los peligros que os quería señalar. No hay cues-
"tión por el momento, puesto que todos los oradores se han
"declarado firmemente adictos a la fuerza obligatoria del
"contrato. (Págs. 215 217).- "502.-Conclusión.- El proble-
"ma llamado de la imprevisión, como cualquier otro proble-
"ma jurídico, puede considerarse desde dos ángulos que no -
"siempre coinciden desde el punto de vista del Derecho ---
"ideal y desde el punto de vista del Derecho positivo.- Se-
"gún el derecho ideal, la fuerza obligatoria del contrato
"debe templarse por la consideración de lo justo. Pero no
"se llega a esta solución dando al juez el poder de revisar
"contratos. Esta facultad debe quedar reservada al legisla-
"dor para que la ejerza en circunstancias excepcionales. --
"En cuanto a nuestro Derecho Civil positivo: Los contratos --
"legalmente celebrados serán puntualmente cumplidos, y que
"la idea contenida en este artículo se encuentra también --
"en el artículo 1796 del Código de 1928, que dice: Los con-
"tratos.. obligan a los contratantes no sólo al cumplimien-
"to de lo expresamente pactado..." (véase el Núm. 436 de es-
"te libro). Como los artículos del Código Napoleón, citados
"por Demogue y por Bonnecase en los números 493 y 500 de es-
"te libro, no se encuentran en nuestro Derecho, salvo lo re-
"lativo al término de gracia aceptado por el artículo 404 --
"del Código de Procedimientos Civiles (véase Núm 431, t. --



110

FORMA A-25

A. D. 1947/30

"II, de este libro), no cabe sostener la existencia de un
"principio general de derecho, favorable a la revisión del
"contrato por el juez. Esta le queda reservada al Legisla-
"dor y veremos su aplicación al estudiar nuestra Legisla-
"ción de moratoria y de pagos en el tomo segundo de este -
"libro.- Las aseveraciones anteriores, son ~~obviamente~~ con-
"trarias a lo dispuesto por el Cuarto Párrafo del artículo
"16 Constitucional, ya que sostiene la ~~autoridad~~ responsa-
"ble, en el acto que de ella reclama que "la teoría de la
"imprevisión en la cual se fundó el ~~que~~ para absolver a
"la demandada Hidrogenadora Nacional, S. A., sobre el cum-
"plimiento del contrato exhibido en autos como fundatorio
"de la acción ejercitada en el negocio, no se encuentra aco-
"gida, mucho menos comprendida en nuestra Legislación." Y -
"es precisamente ~~en~~ este supuesto fundamento en donde se --
"viola en perjuicio de mi representada el artículo 14 Cons-
"titucional ~~en su~~ cuarto párrafo.- En efecto, en los juicios
"del orden civil, y por analogía en los de materia mercantil,
"la sentencia que un juzgador cualquiera que sea su instan-
"cia debe dictar, está constreñido a hacerlo conforme a la -
"letra de la Ley. - Si el caso que se le plantea, si la ac-
"ción que se pretende intentar, o si la excepción en la cual
"se pretende fundar la defensa en una controversia, no se --
"encuentra expresamente señalada en el texto legal, el juzga-
"dor ni puede bajo ningún concepto eludir la resolución. Y -
"más aún, la Constitución General de la República le impone
"la obligación que cuando no pueda dictar su sentencia (el -
"juzgador) conforme a la letra o a la interpretación jurídi-

A. D. 1947/80

"ca del texto legal, fundará ésta en los principios genera-
"les del derecho.- Planteado así el problema, estamos en -
"presencia de un caso en el que la autoridad responsable -
"debió observar que la sentencia del juez de primera instan-
"cia tenía como fundamento los principios generales del de-
"recho, conforme a lo dispuesto constitucionalmente.- A es-
"te respecto es interesante examinar la ejecutoria dictada-
"por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha 15
"de marzo de 1938 en un amparo promovido por Catalina Heza-
"de Díaz y Coagraviados (Tomo LV, Pág. 2641 del Semanario
"Judicial de la Federación), en la cual se sostiene la Te-
"sis de que los principios generales del derecho son: "ver-
"dades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter gene-
"ral, como su mismo nombre lo indica, elaboradas o seleccio-
"nadas por la ciencia del derecho, de tal manera que el juez
"pueda dar la solución que el mismo Legislador hubiera pro-
"nunciado si hubiere estado presente, o habría establecido
"si hubiera previsto el caso; siendo condición de los alud-
"dos principios que no desarmonicen o estén en contradicción
"con el conjunto de normas legales cuyas lagunas u omisio-
"nes han de llenar".- Es pues indudable que la autoridad --
"responsable debió desochar los agravios de la parte apelan-
"te, ya que la sentencia del juez de primera instancia, se
"ajusta a los principios generales del derecho y como se ha
"visto, por disposición constitucional, los principios gene-
"rales del derecho pueden y deben ser fundamento de una sen-
"tencia del orden mercantil, cuando no hay texto expreso --
"que lo prohíba.- Así pues la teoría de la imprevisión tie-



A. D. 1947/80

"ne fundamento legal y desde luego constitucional.- En virtud de lo anterior, y dejando sentado el fundamento constitucional del principio general del derecho que se conoce - con el nombre de Teoría de la Imprevisión, debe examinarse ahora, la validez de esta teoría aplicada por el juez de -- primera instancia, y a la cual le concede ~~por~~ valor la autoridad responsable, violando en perjuicio de mi mandante - lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional.- Para fundar la negativa de aplicar la teoría de la imprevisión, la autoridad responsable cita para su apoyo la Doctrina de don Manuel Borja Soriano, expuesta en su Teoría General de las Obligaciones, obra editada en nuestro País, pero que lamentablemente la Sala responsable parece no conocer, los postulados defendidos por el Maestro Borja Soriano, ya han sido superados por Juristas y por Doctrina más avanzada y más -- acorde a nuestra época.- Es lamentable que los Magistrados integrantes de la Sala responsable no estén al día en sus -- conocimientos jurídicos.- En efecto, la Teoría de la Imprevisión, si siquiera constituye una novedad, por el contrario sus raíces cabe encontrarlas en Cicerón y Séneca. Así -- nos ~~hace~~ saber el Doctor Héctor de Buen Lozano en su -- obra La Decadencia del Contrato, Editorial Textos Universitarios, S. A., México, D. F., 1965 (Debe hacerse notar la -- fecha de esta obra y la fecha de la obra del Maestro Borja Soriano, que es de muchos años antes).- La escolástica no -- solo se preocupó por su estudio, sino que hizo suya esta -- teoría.- Jorge Reyes Tayabas en su obra La excesiva onerosidad superveniente como motivo de la revisión de los contra-

A. D. 1947/30

"tos, México 1958, Tesis Doctoral; afirma que en Francia,
"la teoría de la imprevisión, encuentra su acomodo en las
"resoluciones de los tribunales. Bien conocida es la senten-
"cia dictada por el Consejo de Estado en el caso de la Com-
"pañía de Gas de Burdeos, en contra de la ciudad de ese mis-
"mo nombre, resuelto el 30 de marzo de 1916, que fundándose
"en la necesidad de asegurar el mantenimiento de los servi-
"cios públicos y teniendo en cuenta la variación de las cir-
"cunstancias por causa de guerra, autorizó una modificación
"de las bases de contratación. En Alemania sostiene el Ju-
"rista Lehmann, citado por Enneccerus, como consecuencia de
"la primera guerra mundial, que provocó escasez de materias
"primas, dificultades en la fabricación y devaluación mone-
"taria, la Jurisprudencia estimó oportuno aplicar la cláusula
"de rebus sic stantibus.- Por otro lado la Jurispruden-
"cia Española dice en su obra Reyes Tayabas, consagra el --
"principio de la imprevisión con base en la equidad y en la
"reciprocidad de intereses, transcribiendo una resolución
"de 13 de junio de 1944, de la cual a su vez se transcribe
"lo siguiente: Que atenta nuestra Legislación Civil al prin-
"cipio de la autonomía de la voluntad en el régimen contrac-
"tual que requiere el cumplimiento de lo pactado en los tér-
"minos convenidos, admite, sin embargo, ciertas restriccio-
"nes por razón de la buena fe que preside la contratación -
(artículo 1258 del Código Civil y 57 del Código de Comercio),
"y más concretamente por razón del elemento de justicia ob-
"jetiva, implícita en la exigencia de causa en los contra-
"tos, referida esencialmente en los onerosos a la reciproci-
"dad o equivalencia en las prestaciones de tal suerte, que



112

FORMA A-55

- 35 -

A. D. 1947/30

"en algunas situaciones la ley permite mitigar el excesivo
"rigor de aquel principio de autonomía confirmando al juz
"gador la facultad de acomodar lo convenido por las partes
"a las circunstancias concurrentes en el caso enjuiciado al
"tiempo de ser cumplido lo que se prometió.. que con carac-
"teres más acusados de posibilidad de moderación de lo con-
"venido se pronuncia nuestra más moderna Legislación, que,
"si no es estrictamente aplicable al caso de autos, marca -
"una tendencia que el juzgador debe seguir, que por lo tan-
"to y no obstante los reparos de algún sector de la Doctri-
"na Científica es preciso reconocer la facultad judicial de
"modificar el contrato. - No es el único autor mexicano Re-
"yes Tayabas el que sostiene la bondad y la vigencia de la -
"teoría de la imprevisión. - Rojina Villegas en su libro Dere-
"cho Civil Mexicano, acepta que respecto de casos no espe-
"cialmente previstos, los jueces podrán resolver con base -
"en la equidad, la aplicación de la citada teoría.- Merece -
"especial referencia las disposiciones del Código Civil del
"Estado de Jalisco, que en sus artículos 1771 y 1772 intro-
"duce ya de alcance general, por primera vez en la Repúbli-
"ca Mexicana la Teoría de la Imprevisión, por lo que no se -
"puede sostener que esta Doctrina sea ajena a nuestro dere-
"cho positivo.- Por último, nuestro propio Código Civil del
"Distrito Federal y el Código Civil del Estado de México con-
"templán y aceptan la Teoría de la Imprevisión.- En efecto,-
"el artículo 2309 del Código Civil del Estado de México (don-
"de recordarse que la propia Sala responsable establece que
"la Legislación supletoria aplicable en materia mercantil)

A. D. 1947/30

"es la Legislación Civil Local) establece que: El arrendatario no tendrá derecho a la rebaja de la renta por esterilidad de la tierra arrendada o por pérdida de frutos --
"provenientes de casos fortuitos ordinarios; pero si en caso de pérdida de más de la mitad de los frutos por casos fortuitos extraordinarios.- Entiéndase por casos fortuitos extraordinarios: El incendio, guerra, peste, inundación insólita, langosta, terremoto u otro acontecimiento igualmente desacostumbrado y que los contratantes no --
"hayan podido razonablemente prever.- En estos casos el --
"precio del arrendamiento se rebajará proporcionalmente --
"al monto de las pérdidas sufridas.- Las disposiciones de este artículo no son renunciables. Por último, Messineo Francesco en su obra Doctrina General del Contrato, Tomo II, Ediciones jurídicas Europa-América, Buenos Aires, --
"1952 sostiene que además de otras hipótesis, procede la resolución del contrato también en la hipótesis de excesiva onerosidad sobreviniente, sobre todo respecto a los --
"contratos con prestaciones recíprocas que al mismo tiempo --
"sean de ejecución diferida, como es el caso presente.- La Teoría de la Imprevisión o de la excesiva onerosidad sobrevenida en los contratos como suele denominarse por la doctrina moderna, está ya fuertemente enraizada en el derecho moderno, bien con base en principios generales de equidad o reciprocidad, bien con apoyo en reglas generales o en disposiciones específicas, el hecho cierto es que la obligatoriedad de los contratos ha sufrido un grave quebranto.- --
"Donde se tenga en cuenta la imprevisión, deberá modificar-



113

A. D. 1947/80

"se el contrato. De ello no cabe la menor duda.- Es pues evi-
"dente que la autoridad responsable, desecha sin claro funda-
"mento la Teoría de la Imprevisión. Y este desechamiento, es
"contrario al texto constitucional, ya que debe aceptarse --
"que la teoría de la imprevisión es un principio general del
"derecho, aceptado por la Doctrina Mundial y Mexicana y más
"aún aceptada por la legislación positiva en el Estado de --
"México y al no considerarlo así la Sala responsable viola -
"en perjuicio de mi representada la garantía constitucional
"consignada en el cuarto párrafo del artículo 14 del Código
"Político, ya que como se ha demostrado, la sentencia no se
"ha dictado, conforme a la letra, a la interpretación jurídi-
"ca de la Ley ni se ha basado en los principios generales --
"del Derecho. 2.-La autoridad responsable en el acto que de-
"ella reclamo, viola también en perjuicio de mi representada
"la garantía consignada en el artículo 14 Constitucional, ya
"que no aplica la analogía que por mandato de ese precepto -
"debió aplicar. En efecto, ha quedado demostrado que en el
"propio Código Civil del Estado de México en su artículo 2309,
"(en el Código Civil del Distrito Federal el artículo corre--
"lativo es el 2455 que es idéntico) se recoge la teoría de la
"imprevisión.- En las contiendas del orden civil las lagunas
"de la ley pueden y deben llenarse analógicamente, en cuanto
"la base del razonamiento por analogía es un principio gene-
"ral de derecho que habría que formular en estos términos: -
"La justicia exige que dos casos iguales sean tratados igual-
"mente (García Maines Eduardo, Introducción al Estudio del
"Derecho, Editorial Porrúa, S. A., México, D. F., 1944).- El

A. D. 1947/80

"Juez Civil está obligado pues a aplicar la analogía y si,
"como en el caso concreto un artículo de la Legislación Ci-
"vil, aplicable supletoriamente a la Legislación Mercantil
"establece que en los casos no previsibles deben reajustar-
"se las cláusulas de los contratos de arrendamiento, no ---
"existe obstáculo alguno para que se ajusten también las ---
"cláusulas de un contrato de compraventa, en materia mercan-
"til.- Al no haberlo hecho así también la autoridad respon-
"sable viola en perjuicio de mi mandante la garantía consti-
"tucional contenida en el artículo 14 del Código Político.-
"3.-Por último, se viola también en perjuicio de Hidrogenado
"ra Nacional, S. A., la garantía constitucional consignada -
"en el artículo 16 de la Constitución Política de los Esta-
"dos Unidos Mexicanos, ya que se pretende molestar a la que-
"josa en sus propiedades y posesiones, fundándose y motiván-
"dose ilegalmente la causa del procedimiento.- En efecto, --
"sostiene la Sala responsable que en el caso el incremento -
"del precio en el mercado de ninguna manera justifica el in-
"cumplimiento del contrato no obstante que conforme a lo que
"establece el artículo 1625 del Código Civil del Estado de -
"México, correlativo del 1796 del Distrito Federal, porque -
"tal norma le impone la obligatoriedad de su cumplimiento -
"en ese sentido, sino también a las consecuencias que según
"su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley,
"entendiéndose por buena fe no como lo razona el Juez de Pri-
"mera Instancia en su resolución, en el sentido de que si lo
"es gravoso el cumplimiento del contrato alguna de las par-
"tes no debe observarlo, sino por el contrario con base pre-



A. D. 1947/30

114

FORMA A-10

"cisamente en ello, la buena fe obliga al contratante a con
ducirse como persona honrada consciente de su responsabili
dad y deber, no ateniéndose sola y únicamente a sus intere
ses.- Es conveniente aquí recordar a la Sala responsable
lo que debe entenderse por buena fe y argüir ante ese Máxi
mo Tribunal que en todos los contratos debe obrarse con -
ella.- Planiol en su obra Tratado Práctico de Derecho Civil,
"Cultural Habana, S. A., Habana 1947, Tomo VI, Página 379, -
establece que la buena fe es la obligación de obrar como -
"hombre honrado y consciente, no solo en la formación sino
"también en el cumplimiento del contrato, sin atenerse ---
"exclusivamente a la letra de la misma.- Si la buena fe obli
ga a no engañar al otro contratante, también obligará a no
"enriquecerse a su costa cuando circunstancias imprevistas
"hagan que el contrato resulte totalmente distinto del que
"las partes se habían propuesto.- La buena fe no es, pues,
"una norma jurídica, sino un principio jurídico fundamental,
"esto es algo que debemos admitir como supuesto de todo orde
namiento jurídico.- En el caso no existe la buena fe en la
"actitud de la parte actora, que pretende, basada en un con
cepto reaccionario de cumplimiento de contratos a letra ce
rrada, aun cuando su contraparte reciba grandes perjuicios
"y de gran onerosidad.- En virtud de lo anterior pues, tam
poco es aceptable la postura de la Sala responsable, res
pecto a la buena fe, y esta postura se vuelve anticonstitu
cional, si se toma en cuenta que los principios generales
"del derecho y la buena fe así debe considerarse, debe ser
"el sustentáculo de la sentencia que al efecto se dictó. -

A. D. 1947/80

"En virtud de lo anterior, deberá, debido a que la autoridad responsable en el acto que de ella reciamo, viola, como ha quedado demostrado anteriormente, en perjuicio de mi mandante sus derechos públicos subjetivos consignados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, concederse a mi representada el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada".

QUINTO.-Son infundados los conceptos de violación anteriormente transcritos, que por estar relacionados entre sí se estudian en conjunto.

Si bien es verdad, como lo sostiene el apoderado de la quejosa, que conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 Constitucional, el juzgador se encuentra facultado para fundar la sentencia, tratándose de juicios del orden civil, en los principios generales de derecho, a falta de precepto expreso o de la interpretación jurídica de la ley, debiéndose entender como tales, conforme al criterio sustentado por este Alto Tribunal en la ejecutoria que al efecto invocó, "verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general, elaboradas o seleccionadas por la ciencia del derecho, de tal manera que el Juez pueda dar la solución que el mismo legislador hubiera pronunciado si hubiere estado presente, o habría establecido si hubiere previsto el caso; siendo condición de que los aludidos principios no desarmonicen o estén en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas u omisiones han de llenar"; no lo es menos que la



A. D. 1947/30

teoría de la imprevisión, aún considerada como un principio general de derecho, al existir disposición expresa aplicable al caso y desarmar con el conjunto de normas que regulan los contratos, en especial los de naturaleza mercantil, no es acogida en nuestra legislación.

En efecto, como lo estima la Sala responsable, el artículo 1625 del Código Civil del Estado de México, igual al 1796 del Código Civil del Distrito Federal, supletoriamente aplicado, siguiendo el sistema rígido de los contratos, acorde con el principio relativo a los efectos de la declaración de voluntad, dispone que aquellos obligan a las partes al exacto cumplimiento de las prestaciones expresamente pactadas, y además, a las consecuencias que de los mismos se deriven, según su naturaleza, conforme a la buena fe, al uso o a la ley, precepto que, en esas condiciones, no deja lugar a su interpretación a fin de aplicar la teoría de la imprevisión en razón de esa buena fe, que obviamente constituye un principio general de derecho, pues precisamente, con base en ella, el obligado debe conducirse como persona consciente de su responsabilidad en el cumplimiento cabal de sus obligaciones, "cualquiera que resulte la magnitud de su contenido, aún cuando sobrevengan acontecimientos que no se previeron o no pudieron preverse y que lo modifiquen", como lo estima don Trinidad García en su "Teoría de la Imprevisión en los Contratos bajo el régimen de derecho civil y del Common Law" citado por el Licenciado Jorge Reyes Talzabas en la obra invocada por el apode-

A. D. 1947/30

Trato de la quejosa, página 131, máxime si se toma en cuenta que de acuerdo con lo estatuido en el artículo 335 del Código de Comercio, las ventas de naturaleza mercantil, como el de la especie, no se rescinden aun por causa de lesión, sin que ello impida, por otra parte, que de existir causas imprevisibles que alteren fundamentalmente la economía de un determinado grupo social, no apreciado por las partes, se modifiquen las condiciones de los contratos relativos, mediante disposiciones de carácter general.

Ahora bien, el que el legislador hubiese acogido - la indicada teoría de la imprevisión en casos especiales, - como acontece tratándose del artículo 2309 del Código Civil del Estado de México que contempla el arrendamiento de fincas rústicas, no significa que por analogía debe aplicarse el principio que lo informa, tratándose de contratos de diversa naturaleza, como es el caso que nos ocupa, pues obviamente aquel precepto constituye una excepción a la regla general que regula los efectos de las declaraciones de voluntad en nuestra legislación, el que por ello resulte inaplicable, siendo oportuno transcribir aquí al respecto, el pensamiento de don Trinidad García en la obra anteriormente citada, página 131 y siguientes: "Por esta razón (se refiere "a la no existencia del problema de interpretación en cuanto "al cumplimiento de los contratos establecido en el Código - "Civil) no cabe estimar que el advenimiento de tales acontecimientos dé lugar a una situación que no se pueda resolver de acuerdo con las disposiciones legales existentes. Sería -



L. D. 1947/30

116

"arbitrario acudir a los métodos de interpretación para limi-
"tar el alcance de los efectos de la declaración de voluntad,
"invocando la ausencia de disposición expresa que lo autori-
ce; la falta de esta disposición no significa que el caso no
"deba decidirse de acuerdo con el principio legal relativo a
"los efectos de la declaración de voluntad; es cierto que la
"interpretación del Derecho no es solo buscar la voluntad del
"legislador derivada de los términos expresos de la ley y ate-
"nerse exclusivamente a ella, pues con frecuencia el intérpre-
"te debe ir más allá y complementarlo o adicionar el Derecho -
"positivo respecto de casos no previstos por éste, pero sien-
"pre fundándose en el mismo, sin hacer labor libre de legis-
"lador, sobre todo cuando no puede decirse que el problema -
"no admite solución por aplicación de principios vigentes y
"aun cuando haya poderosas razones de interés general para --
"resolverlo en determinado sentido".

Lo expuesto lleva a concluir que al considerar la -
responsable en la sentencia combatida, que en el caso el in-
cremento en el mercado del precio de la semilla de ajonjolí
objeto de la compraventa pactada, en manera alguna justifica
el incumplimiento de la sociedad quejosa de la obligación -
contraída, toda vez que la teoría de la imprevisión o del -
riesgo imprevisible no está adoptada por la legislación apli-
cable, cumplimiento que además es posible, obró correctamen-
te, no cometiendo las violaciones que se le atribuyen, todo
lo cual conduce a negar la protección federal solicitada.

Por lo expuesto y con fundamento además en los ar-

A. D. 1947/30

títulos 103, fracción I y 107 fracciones I, II, y III inciso a) Constitucionales, 77, 78, 79, 133, 186 y 190 de la Ley de Amparo se resuelve:

UNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Hidrogenadora Nacional, S. A., por conducto de su apoderado, [REDACTED] contra los actos que reclama de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales e hizo consistir en la sentencia definitiva dictada por aquella, en el toca a la apelación del juicio ordinario mercantil seguido por [REDACTED] en contra de la Sociedad quejosa, ante el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de El Encarnación, de la propia Entidad Federativa.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a la autoridad responsable, y en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos. Fue relator el señor Ministro J. Ramón Palacios Vargas.

Firman los CC. Presidente y la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

EL PRESIDENTE DE LA SALA


LIC. J. RAMÓN PALACIOS VARGAS.




117

FORMA A-55

- 45 -

A. D. 1947/80

LA SECRETARIA DE ACUERDOS


LIC. RAQUEL FLORES MUNGUÍA

Se hace constar que esta hoja corresponde al
Amparo directo número 1947/80, promovido por Hidrogena
dora Nacional, S. A.

En 17 NOV. 1980 por esta de la misma fecha,
se notificó la resolución anterior a los interesados y al Ministerio Público Federal.

SENTENCIA

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in a cursive hand, and the addresses are given in a more formal, printed style. The list is organized in a columnar fashion, with names in the first column and addresses in the second column. The names are: John A. Smith, James B. Jones, William C. Brown, and Thomas D. White. The addresses are: 123 Main Street, New York, N.Y.; 456 Elm Street, Boston, Mass.; 789 Oak Street, Philadelphia, Pa.; and 101 Pine Street, San Francisco, Calif.

2. The second part of the document is a letter from the committee to the members of the association. The letter is dated January 1, 1900, and is addressed to the members of the association. The letter is written in a cursive hand and is signed by the chairman of the committee, John A. Smith. The letter discusses the work of the committee during the past year and outlines the plans for the future. The letter is organized in a columnar fashion, with the text of the letter in the first column and the names of the members in the second column. The names of the members are: John A. Smith, James B. Jones, William C. Brown, and Thomas D. White.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the association. The names are written in a cursive hand, and the addresses are given in a more formal, printed style. The list is organized in a columnar fashion, with names in the first column and addresses in the second column. The names are: John A. Smith, James B. Jones, William C. Brown, and Thomas D. White. The addresses are: 123 Main Street, New York, N.Y.; 456 Elm Street, Boston, Mass.; 789 Oak Street, Philadelphia, Pa.; and 101 Pine Street, San Francisco, Calif.